

SOCIALISMO Y MERCADO

Gonzalo D. Martner

1. Socialismo real

Con la caída del muro de Berlín y el posterior derrumbre de la URSS culmina la constatación del fracaso del modelo dictatorial de partido único y economía estatal centralizada vigente por siete décadas en los países del Este. Este modelo permitió a la URSS durante el período estalinista dotarse aceleradamente de grandes infraestructuras productivas sobre la base de la estatización de la industria, la organización autoritaria de la administración económica, la cuasi militarización del trabajo, la colectivización forzada de la agricultura y la liberación de un flujo considerable de mano de obra. La centralización por el Estado de la mayor parte del excedente económico hizo posible concentrar masivamente las inversiones en algunas ramas consideradas prioritarias, comprimiendo al mismo tiempo de manera drástica el consumo popular, proceso que se acentuó durante el esfuerzo de guerra entre 1941 y 1945.

Los planes quinquenales tenían por objetivo crear grandes industrias de base, incrementar el conjunto de la producción, desarrollar la agricultura, aumentar el nivel de vida y alcanzar los niveles de desarrollo de los grandes países capitalistas. Sólo algunas de estas metas fueron alcanzadas, en detrimento de las demás y sobre todo con un costo social enorme. La agricultura se derrumbó, estrechando la base del excedente que debía absorber la industria. El nivel de vida rural y urbano cayó. Las industrias livianas, las de bienes de consumo, la vivienda, fueron sacrificadas de modo duradero. Su retraso respecto de las industrias pesadas y del sector de bienes de producción adquirió un carácter estructural.

En este sistema, la inversión no tenía costo. Mientras más crecía la empresa, mayor era el rol de su director, que a su vez buscaba el incremento máximo de su dimensión más que innovar. La innovación es peligrosa, interrumpe la regularidad del proceso. El resultado ha sido un crecimiento de tipo extensivo, involucrando cada vez mayores cantidades de recursos antes que incrementos de productividad, crecimiento que en los años setenta y ochenta terminó por agotarse.

Lo mismo ocurrió con la capacidad regulatoria de la planificación centralizada. El principio de desagregación del plan macroeconómico por grandes sectores en planes de rama por ministerio, los que a su vez establecían los planes por empresa, constituyó el corazón del carácter imperativo de la planificación soviética. Pero este esquema no pudo superar sus factores de incoherencia técnica y social. Técnicamente, es imposible centralizar toda la información necesaria para una adecuada asignación de los recursos y socialmente no siempre es posible imponer a los trabajadores el aumento de las normas, con el consiguiente cambio frecuente de empleo, mientras muchos directores disimulan o sesgan la información al sobreestimar las necesidades y subestimar las capacidades para obtener mayores holguras para la fijación y realización de las metas del plan. Todos estos comportamientos conflictivos y no susceptibles de coordinación por el centro dieron

origen a la "regulación penúrica", según la expresión del economista húngaro Janos Kornai, vale decir la presencia permanente de desequilibrios entre la demanda expresada y la oferta de bienes.

El resultado de estos procesos ha sido descrito del siguiente modo por el economista soviético Abel Aganbeguian, gestor de la primera etapa de la perestroika: "las manifestaciones de marasmo y apatía condujeron a una parte de la población a perder toda motivación por el trabajo, a percibir la propiedad social como algo ajeno. Las tendencias a acaparar y a la corrupción se establecieron. La justicia social fue transgredida. Los planes de crecimiento del bienestar no fueron ejecutados, se produjeron alzas de precios camufladas. La nivelación y fijación sin fundamentos del salario, los privilegios entregados a ciertas categorías de trabajadores ocasionaron enormes perjuicios. El alcoholismo, que afectó la salud de una parte de la población, se extendió ampliamente: constituye por lo demás una de las razones por las cuales, en los últimos veinte años, el promedio de vida en la URSS no aumentó y la mortalidad de los hombres en edad activa se incrementó".

La necesidad de una drástica reforma de la economía se transformó poco a poco en una evidencia para la dirigencia de la ex URSS.

Es pertinente seguir a Charles Bettelheim cuando concluye que "un plan que pretende reglamentarlo todo y preverlo todo fracasa en su objetivo. En una economía compleja y conflictiva, no se puede planificar en detalle. Dado que sigue siendo deseable obtener sino un manejo al menos una cierta orientación del desarrollo económico, el plan debe tener una amplitud que sea manejable y que por tanto deje subsistir apoyos, en particular deje funcionar el sistema de precios. La inmensa mayoría de los precios no puede ser fijada centralmente, sin lo cual se llega a una deriva completa de las decisiones económicas".

2. Capitalismo

En vista del derrumbre comunista muchos nos invitan a abandonar la vocación de cambio social y la aspiración igualitaria del socialismo en vista del derrumbre comunista.

Una interpretación dogmática de Marx puso por muchos años énfasis en la hipotética ineluctabilidad de la crisis del capitalismo y su inviabilidad económica a largo plazo, de la cual emanaría mecánicamente un proceso de revolución social. Ello ha resultado falso, pues la existencia de relaciones de mercado en los intercambios de bienes, de capitales y de trabajo y simultáneamente de propiedad privada de los medios de producción en vistas a maximizar ganancias no sólo ha demostrado ser económicamente viable -aunque su tendencia a las crisis más o menos periódicas permanezca bajo nuevas formas- sino poseer una importante capacidad de expansión y reproducción.

No obstante, una crítica moderna del capitalismo no ha de renunciar a la reivindicación de la superioridad ética, política e incluso económica del reclamo por igualdad social que encarnan las ideas socialistas. En efecto, el capitalismo, particularmente en sus versiones más libremercadistas, no ha logrado resolver el problema de la desigualdad de la distribución de los ingresos y de las oportunidades de inserción en la sociedad. La discriminación de clase, de sexo y de raza siguen prevaleciendo de un modo más o menos generalizado en los sistemas liberales.

A su vez, la inseguridad económica de quienes viven de su trabajo, la desprotección frente al desempleo o a la enfermedad, continúan siendo características de sociedades esencialmente duales, en las que prevalece la dinámica de inclusión o exclusión en el sistema y la clásica "separación de los productores de los medios y los frutos de su trabajo".

El resurgimiento en los años 80 de los modelos de capitalismo salvaje no ha hecho por lo demás sino agravar esas características. En EE.UU., la distribución del ingreso se ha vuelto más inequitativa: el salario medio de un obrero norteamericano es hoy inferior al de 1979; el porcentaje de mujeres con niños pequeños que deben trabajar pasó de 30% a 65% entre 1960 y 1987; el endeudamiento hipotecario de los hogares aumentó de un 21% de los ingresos familiares en 1973 a un 44% en la actualidad: estas son algunas de las secuelas del reaganismo.

La propia construcción de sistemas de seguridad social y de Estados-Providencia fue fruto de la presión social y de los movimientos obreros por mayor protección frente a las incertidumbres del capitalismo salvaje, dando lugar a modelos con escasa integración social, o a aquellos más consensuales e integrativos, donde la huella de la intervención pública es evidente.

Al propio tiempo, permanece el quiebre entre naciones ricas y pobres y la distancia decisiva entre la prosperidad de pocos países industrializados de altos ingresos por habitante y países pauperizados de demografía explosiva. Estos siguen siendo marginalizados en el contexto de una economía mundial crecientemente internacionalizada y en cuyos flujos más dinámicos han logrado insertarse sólo unos pocos nuevos países industrializados.

Una de las características del mundo contemporáneo es que los desequilibrios territoriales entre naciones y al interior de las naciones requieren, entonces, de intervenciones colectivas y acciones públicas correctoras de creciente magnitud.

Finalmente, y no menos importante, la necesidad de políticas públicas que expresen la voluntad colectiva ha resultado reforzada con las consecuencias cada vez más extendidas de los daños a los equilibrios en los ecosistemas. La polución de las aguas y del aire y la degradación general del medio ambiente son consecuencia de la regulación de mercado de la actividad económica y de los modelos "productivistas": su contención requiere de una voluntad colectiva, por lo demás crecientemente supranacional, para hacer posible un desarrollo viable de las diversas sociedades humanas.

Frente a los grandes temas de la discriminación social, sexual y racial, de las desigualdades entre naciones y entre territorios, de las amenazas al medioambiente, las respuestas socialistas no son las únicas posibles y por lo demás muchas de ellas son imperfectas. Sin embargo, la visión socialista de las cosas es la antítesis necesaria de la que pone por delante el individualismo liberal, que siempre asegura que prevalezcan los intereses de las élites que concentran la riqueza económica o el poder político (o ambos) por aquellos de las mayorías asalariadas o marginadas.

3. Socialismo y Mercado

La derrota de George Bush parece anunciar el comienzo del fin de la ola neoconservadora. Nuevos enfoques económicos y posturas más abiertas a la corrección de las desigualdades van reemplazando las simplificaciones neoliberales y

el "menos Estado y más mercado" como respuesta a todos los problemas. Liberado además el mundo de las dictaduras burocráticas y caídos los muros, nuevos horizontes intelectuales y políticos parecen abrirse.

Paradojalmente, en nuestro país sigue reinando una tendencia al "pragmatismo" y a las alabanzas rituales a la economía de mercado. Afirmaciones como "la economía más eficiente del mundo puede generar una distribución de los salarios y de la propiedad que ofendería al defensor más acérrimo de los libres mercados" no se escuchan con frecuencia. Esta afirmación no corresponde a ningún izquierdista de nota sino a un economista clasificado a la derecha del centro en una reciente reseña del estado de la teoría económica: se trata del ciudadano norteamericano y premio nobel Paul Samuelson.

Por el contrario, en nuestro país algunas personas de reconocida trayectoria de izquierda plantean su adscripción a la economía de mercado y sólo la matizan en el sentido de ver como "sin ser estatista, el Estado puede fortalecerse en su rol regulador para que el mercado funcione con menos imperfecciones". No deja de llamar la atención cuan profundamente se ha instalado una suerte de nueva moda que consiste en declararse más liberal que el vecino.

En primer lugar, cabe cuestionar la moda liberal por razones de rigor intelectual. Como lo señala L.C. Thurow, economista del MIT, cuando "se afirma que el individuo es un consumidor o un productor maximizador en aquellos mercados libres de oferta y demanda que establecen un precio de equilibrio para cualquier clase de bien o servicio" se está inmerso en una concepción que "pertenece a una ciencia económica santificada por una supuesta consistencia intelectual con implicaciones que van mucho más allá del terreno de la teoría económica convencional. En suma, es también una filosofía política que a menudo se aproxima a algo rayano en lo religioso".

Quienes tenemos una visión no religiosa de la economía admitimos como hipótesis que si un sistema de mercado de equilibrio general fuera perfectamente competitivo y no hubiera efectos externos, entonces la economía de libre mercado sería eficiente, en el sentido que no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. Con estos supuestos los precios transmiten señales sobre la escasez económica y el valor de los bienes a los productores y a los consumidores y el sistema permite obtener el mayor volumen de producción con los recursos y la tecnología disponibles.

La realidad es distinta. Muchos mercados son imperfectos: cuando son monopólicos, los productores restringen la cantidad producida para elevar los precios y las ganancias, generando un despilfarro social; cuando no se incluyen en las transacciones de mercado los efectos secundarios de la producción o el consumo, se deteriora el medio ambiente y el bienestar; cuando la información es insuficiente o los precios son rígidos para los participantes en el mercado, se asigna mal los recursos. Se provoca así ineficiencia económica que requiere de intervenciones estatales bien concebidas, capaces de corregir o aminorar las imperfecciones del mercado, en suma un sólido programa de acción pública.

El problema es, sin embargo, más vasto. Incluso admitiendo que la competencia fuera perfecta, siguiendo otra vez a Samuelson, esta "podría dar lugar a una situación de desigualdad general, de niños malnutridos que crecerían y tendrían hijos malnutridos y de perpetuación de la desigualdad de las rentas y de la riqueza una generación tras otra". Se trata de la desigualdad en la dotación inicial de factores,

en patrimonio y capital humano. Ningún economista lúcido cuestiona que el mercado **no** corrige estas desigualdades iniciales. Ello nos lleva al tema de la preferencia de la sociedad por mayor o menor igualdad.

Es posible aceptar grados de inserción desigual en la economía si todos tienen una oportunidad razonable de obtener resultados, sin graves desventajas de nutrición y educación al inicio de la vida activa. Puede aceptarse incluso desiguales resultados cuando son fruto de preferencias individuales, por ejemplo de trabajar menos y tener menos ingresos. Lo propio puede decirse cuando derivan del mérito y del esfuerzo en la actividad económica o cuando reconocemos que algunas recompensas desiguales pueden ayudar al crecimiento general de la sociedad.

Pero a muchos no nos resulta éticamente aceptable que nacer en una familia pobre y/o en un territorio pobre determine inexorablemente un destino de marginalidad, opresión y ausencia de oportunidades.

4. Estado

Desde una perspectiva de izquierda no sólo se trata, pues, de corregir las imperfecciones del mercado. En el mercado, contrariamente a la democracia, cada voto (cada consumidor o productor) no vale igual. Hay también que redistribuir los ingresos y estructurar un programa consistente y persistente en el tiempo para obtener mayores grados de igualdad de derechos y oportunidades. Se trata de establecer una economía solidaria, en la que coexistan mercados sin regulación con mercados regulados o administrados por el Estado y empresas privadas con empresas públicas o de carácter social.

Si se desea cambiar la distribución del ingreso, el Estado debe, además de proveer directamente bienes públicos que no puede proveer la empresa privada o asumir actividades con importantes efectos externos sobre la economía (como es el caso obvio de CODELCO en nuestro país), actuar mediante tres formas básicas:

- a) producir una igualación inicial de las oportunidades, particularmente mediante el cambio de las productividades de las personas más pobres mediante acceso a la educación y la capacitación;
- b) intervenir en el "mercado de trabajo" mediante la obligatoriedad de salarios mínimos y seguridad laboral (en niveles compatibles con la generación de empleos) y mediante programas de fomento e integración de la economía informal;
- c) gravar los ingresos y patrimonios altos, así como los ingresos "no ganados" provenientes de rentas no productivas, y subsidiar focalizadamente los bajos, avanzando hacia el establecimiento de ingresos básicos al margen del mercado que aseguren tanto un nivel mínimo nacional de vida para todos los habitantes como una inserción en actividades de interés social.

Se requiere también establecer una política industrial que oriente las opciones de desarrollo en un sentido equitativo. Los instrumentos básicos de la política industrial son:

- las ayudas a la inversión y al acceso al capital, mediante incentivos tributarios (que aumenten los recursos de autofinanciamiento o disminuyan el costo del capital), crediticios y de provisión de garantías;

- las ayudas a las inversiones no materiales, vale decir en investigación-desarrollo, innovación tecnológica y asistencia técnica, mediante estímulos fiscales o créditos y subsidios orientados a la pequeña y mediana empresa para estos efectos;
- el control de las prácticas no competitivas;
- la orientación de los sistemas de formación y readaptación de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, el principal instrumento de la política industrial es la concertación entre el Estado y las empresas y entre dirección y trabajadores al interior de las empresas. La definición concreta de una política industrial eficaz debe resultar de un diálogo permanente y basado en la confianza entre organismos del Estado y empresas. Este diálogo -aunque ello es válido con particular intensidad en el caso chileno dados los traumas existentes- en ninguna parte es fácil a raíz de las diferencias de preocupaciones, de enfoque, de lenguaje y de prácticas entre los interlocutores.

Una política activa de fomento productivo encuentra en nuestro país inmediatos contendores dispuestos a vilipendiar a los que "quieren volver al pasado", "no confían en el mercado" o "quieren poner en manos de burócratas decisiones económicas que deben tomar los particulares". De tanto repetirse, estos asertos terminan por darse por válidos sin mayor análisis. Cualquier forma de acción estatal es inmediatamente identificada con las peores derivas expropiatorias imaginables, como si sólo hubiera lugar en las economías contemporáneas para el liberalismo a ultranza o la estatización completa. La noción de economía mixta, que es sin embargo el modo de organización de la producción hacia el cual convergen la mayoría de las sociedades más dinámicas, es completamente ignorada en beneficio de un maniqueísmo repetitivo hasta la saciedad.

Las políticas industriales forman parte de los dispositivos de política pública en todos los países recientemente industrializados exitosos. Ello no es casual, pues existen poderosas razones para una acción pública en materia de fomento productivo.

No es del caso plantear aquí el tema en toda su extensión: bástenos mencionar la necesidad de orientar o fomentar aquellas decisiones de inversión de largo plazo que las señales del mercado ilustran sólo en parte o cuya magnitud implica riesgos muy altos para cualquier empresa individual; la no consideración por las empresas de los "efectos externos" en materia de medio ambiente, de equilibrios regionales, de vulnerabilidad exterior, que requieren de regulaciones correctoras; la existencia de asimetrías de poder de mercado que generan ganancias monopólicas; la necesidad de acompañar las reconversiones industriales mediante la formación de mano de obra especializada o su recalificación periódica.

Ello no obsta que para que el sistema productivo produzca con eficacia los bienes que le son demandados, los actores económicos deben conocer bien la naturaleza de la demanda y estar en condiciones de reaccionar constantemente a las condiciones cambiantes para maximizar la eficiencia. La empresa autónoma, dueña de sus decisiones, es la que está en la mayoría de los casos mejor adaptada para cumplir esta tarea. Es involucrándose directamente como se aprende a conocer con precisión lo que buscan los compradores y el modo en que se presenta la oferta de los competidores: a partir de esas prácticas es como mejor se puede deducir la naturaleza de los productos nuevos a crear y los esfuerzos a realizar para ser competitivo. Este conocimiento obtenido en la compleja realidad de las unidades de producción es irremplazable, aunque deba ser útilmente completado a través del apoyo de los servicios públicos y la sujeción a las regulaciones indispensables de toda actividad económica que no dé la espalda al interés general.

Economía de mercado o estatismo es un falso dilema: la perspectiva socialista moderna debe por el contrario subrayar su adhesión a un sistema de ECONOMIA SOLIDARIA a través de formas mixtas de funcionamiento de la economía, con espacios de operación del mercado (particularmente en la oferta y demanda de bienes), de intervención del Estado (particularmente en la modificación de los ingresos, en el mercado de trabajo y en general en los mercados de factores) y de acciones económicas directamente sociales. Pretender que el mercado regule la totalidad de la vida económica es renunciar a toda perspectiva de cambio social.

Diciembre 1992.